

# Fondos europeos Bruselas presiona para que la reforma laboral tenga el consenso del diálogo social

**La Comisión,  
dispuesta a  
dar más plazo  
para negociar**

**Retrasar el pacto  
aplazaría el  
desembolso de los  
10.000 millones**

P. SEMPERE / R. PASCUAL  
MADRID

Una decena de representantes de la Comisión Europea examinaron el miércoles a responsables de las patronales y de los sindicatos acerca del estado de las negociaciones para las reformas de pensiones y del mercado de trabajo. La importancia de esta evaluación por parte de Bruselas radica en que el desembolso a España de 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU en la segunda parte del año depende del éxito de estas reformas en 2021.

Fuentes conocedoras de las reuniones mantenidas por separado con patronal y sindicatos, aseguran que los examinadores de la Comisión dejaron muy clara su insistencia en que la reforma laboral fuera acordada entre el Ejecutivo y los interlocutores sociales, para que dure en el tiempo. De hecho, los responsables comunitarios consideran que el pacto es sumamente importante porque, a su entender, se trata de una reforma estructural que debe llevarse a cabo independientemente del Gobierno que esté en el poder.

Otras fuentes consultadas aseguran que este

interés de la Comisión porque la reforma laboral se haga con el respaldo social haría que Bruselas esté dispuesta a flexibilizar el plazo y llevarlo más allá de fin de año si las negociaciones prosperan. Si bien, este retraso en los plazos conllevaría también un aplazamiento del ingreso de los 10.000 millones prometidos para antes de que termine el ejercicio.

No obstante, todo apunta a que el Gobierno no estaría de acuerdo con retrasar el ingreso de estos fondos, sobre todo en un escenario de recuperación aún incierto y con un repunte inflacionista, además de un elevado endeudamiento de la economía española. Esto explicaría que, preguntados por la posibilidad de que Bruselas dé más tiempo a patronal y sindicatos, en el Ministerio de Trabajo aseguren que no les consta.

**Los responsables comunitarios parecen temer una reforma en solitario de Díaz**

La preocupación de la Comisión Europea entronca con los pocos detalles que el Gobierno trasladó a Bruselas acerca de la reforma en ciernes. Los cambios planteados hasta la fecha pasan por reducir a tres los tipos de contrato (indefinido, temporal justificado y formativo); transformar los ERTES en una herramienta de flexibilidad estructural con formación a los afectados, o potenciar las políticas activas de empleo. Hasta ahí, ningún problema aparente. Más espinoso resultará consensuar la revisión de la última reforma laboral en lo relativo a negociación colectiva, donde se plantea recuperar la ultraactividad de convenios; devolver la prevalencia de la negociación sectorial sobre la de empresa y endurecer la modificación de condiciones.

El Ejecutivo comunitario, en una misiva enviada antes de verano a Trabajo, fijó algunos objetivos que debe cumplir el sistema de negociación colectiva. Bruselas, en concreto, pide que los grandes cambios previstos en el componente 23 se lleven a cabo con respeto al diálogo social y con "un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y la



Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social. EFE

de seguridad en el mercado de trabajo".

En el documento, además, la Comisión pide al equipo de Yolanda Díaz un informe *ex ante*, es decir, previo a que se presente la reforma oficial sobre la negociación colectiva, en el que se muestren "las carencias de la legislación vigente en materia de convenios colectivos", esto es, en la reforma laboral de 2012 del PP.

Los miembros de la Comisión tuvieron oportunidad de constatar el miércoles que el acuerdo

entre patronal, sindicatos y Gobierno no está ni mucho menos cerca. Las partes mantienen sus posturas respectivas desde el documento de propuestas enviado por Trabajo en julio y que ya en su día despertó fuerte rechazo de los empresarios por el modelo de contratación que propone el Ejecutivo y por la vuelta atrás en la flexibilidad interna logrados en la reforma de 2012, que afectan a la modificación sustancial de las condiciones laborales y a otras cuestiones relativas

a la negociación colectiva.

Yolanda Díaz ha reiterado que seguirá el acuerdo hasta el final, aunque, al mismo tiempo, también ha sugerido que el Ejecutivo sacaría adelante la reforma laboral igualmente en el caso de que no hubiera pacto. Y esto es precisamente lo que parece temer Bruselas, que en su último informe sobre España ya pedía, entre otras cosas, que se conservasen los mecanismos de flexibilidad interna en las empresas de la reforma de 2012.

## Los economistas rebajan la previsión de crecimiento para este año al 5,8%

DENISSE LÓPEZ  
MADRID

El Consejo General de Economistas (CGE) revisó ayer a la baja su previsión de crecimiento económico para este año al pasar del 6,3% al 5,8%. Se trata de una reducción esperada tras el recorte al avance del PIB en primavera del 2,8% al 1,1% intertrimestral y del 19,8% al 17,5% anual, hecho en septiembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de ello, el CGE se mantiene optimista

ta y prevé un rebote superior al 3% en el tercer trimestre gracias a la recuperación del sector turístico, el aumento del consumo, y la mejora de las exportaciones en paralelo al "mejor crecimiento de la eurozona, el mercado natural" de España.

La corrección de la tasa de crecimiento se achaca a las tensiones inflacionistas agravadas por los precios de la energía y la retirada gradual de los bancos centrales sobre la compra de activos, así como un posi-

ble aumento prematuro de los tipos de interés. Según las estimaciones, un cambio en las políticas económicas del Banco Central Europeo sería muy perjudicial para España debido a su alto déficit, el cual se situará al final del año entre el 8% y el 9%, según el CGE. A ello se suma la deuda pública, que acabará el año en torno al 121,5% del PIB.

En cuanto a los Presupuestos para 2022, el presidente del CGE, Valentín Pich, espera que los 25 000

millones de euros de los fondos europeos que están incluidos, sirvan para "fortalecer la economía y consolidar la ansiada recuperación".

No obstante, considera que se debe aprovechar

**El CGE estima que España cerrará 2021 con una deuda pública en torno al 121,5% del PIB**

este momento para introducir dinámicas de mejora en el modelo productivo antes de que vuelvan las reglas fiscales y los ajustes tanto por parte de la Unión Europea como por el resto de países.

Quien se mostró más crítico con la ejecución de estos fondos fue Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, quien criticó el plan de recuperación de España por "carecer" de reformas clave en materia laboral, fiscal y de pensiones, así como por

"priorizar bienes de consumo en vez de inversión en capacidades".

Y calificó de "altamente preocupante la poca ambición" para crear empleo joven pese a que el país encabeza el paro juvenil en la UE. Al respecto, detalló que el programa de formación dotado de 120 millones tiene como objetivo alcanzar a 3.000 jóvenes en tres años; un porcentaje menor cuando hay más de 580 000 menores de 25 años actualmente desempleados.